

La oposición regional a las negociaciones con el ELN*

Omar Gutiérrez Lemus

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en Análisis de problemas políticos,
económicos e internacionales contemporáneos,
Universidad Externado de Colombia.

INTRODUCCIÓN

Durante los años 1999-2001, el Magdalena Medio vivió un período de profunda convulsión política que tuvo como motivación principal la oposición a la declaración de una zona desmilitarizada para realizar las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN. Mediante el recurso a la protesta y a la movilización (paros de transporte, bloqueos de vías y parálisis temporal de algunas actividades económicas) distintos sectores sociales encabezados por la Asociación Civil para la Paz (Asocipaz) lograron aplazar reiteradamente la celebración de la “Convención Nacional” en territorio del sur de Bolívar. Este fenómeno sólo era comparable con lo ocurrido veinte años antes en Puerto Boyacá, cuando el gobierno de Belisario Betancur ponía en marcha otro proceso de paz¹.

El surgimiento de Asocipaz en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y la extensión de su influencia en un buen número de municipios del Magdalena Medio ilustra un cambio drástico de las relaciones entre ciertos sectores sociales y políticos y los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) asentados en este territorio. Este hecho muestra también la serie de tensiones y pugnas que a nivel regional generó la decisión presidencial de adelantar un proceso de negociación con el ELN, la guerrilla de mayor influencia histórica y política en esta zona desde los años setenta, justo en el momento en que las AUC se instalaban a la fuerza en las cabeceras municipales del sur de Bolívar y lograban golpear de manera significativa a esta organización insurgente.

En las páginas que siguen se analiza la serie de circunstancias y hechos que favorecieron el fortalecimiento del liderazgo de Asocipaz. En

* Este trabajo fue elaborado en el marco del proyecto *Guerra, democracia y globalización que adelanta el IEPRI* y es financiado por el London School of Economics y Colciencias.

¹ Durante los años ochenta, otra organización social, Acdegam, lideró un proceso de oposición a las negociaciones entre el Gobierno y las FARC en Puerto Boyacá. Ver Carlos Medina G., *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 1990.

especial se exploran aspectos relativos a los grupos sociales que apoyaron su nacimiento y “legitimaron” sus propuestas políticas en los ámbitos local y regional; las formas de movilización popular que ensayó y los métodos de divulgación de sus reivindicaciones; las razones que esgrimió frente al gobierno central y a la población civil para justificar su oposición al proceso de negociación con el ELN; la forma de ejercicio de la autoridad que intentó imponer desde los gobiernos municipales y las relaciones que mantuvo con los grupos paramilitares².

ANTECEDENTES

Los orígenes de Asocipaz deben buscarse en los sucesos que rodearon las elecciones municipales de 1997 y la serie de movilizaciones campesinas ocurridas en el sur de Bolívar entre 1996 y 1998. Ciertamente, durante 1997 tanto el ELN como las FARC decidieron impedir las elecciones de alcaldes y concejos municipales; esta determinación trajo hondas consecuencias dado que llevó a un punto de ruptura las relaciones entre la clase política local y los grupos guerrilleros. De otra parte, las marchas campesinas de 1996 y 1998 marcaron el distanciamiento de las “élites” locales y las organizaciones cívicas y campesinas que habían acaparado la vida social y política del sur de Bolívar durante casi treinta años, a través de paros y movilizaciones³.

Los cambios introducidos por la descentrali-

zación en la vida política local (elección popular de alcaldes y gobernadores) y el fortalecimiento de las redes del narcotráfico⁴ minaron las bases de los acuerdos que permitieron la convivencia entre la guerrilla y la clase política local antes de 1996. Estos fenómenos fomentaron también la integración del sur de Bolívar al contexto económico y político del departamento y al resto del Magdalena Medio⁵. Al mismo tiempo, en este panorama, los grupos paramilitares hicieron aparición y cumplieron un papel fundamental.

Las AUC hicieron irrupción en el sur de Bolívar persiguiendo y asesinando a los alcaldes y concejales en los municipios donde la guerrilla tenía una reconocida influencia. Esto sucedió a comienzos de 1997 en municipios como Yondó, Río Viejo y Tiquisio. De esta forma se puso en evidencia que esta ofensiva paramilitar tenía un fuerte componente político⁶. Por su parte, la guerrilla reaccionó intimidando a otro sector de la clase política (Santa Rosa del Sur, Simití) que creía más cercano a la gobernación de Bolívar y, suponía, era un potencial aliado de los grupos paramilitares. En otras palabras, para los insurgentes fue claro que el arribo de las AUC al sur de Bolívar tenía un origen político y electoral muy asociado al accionar de las redes de los partidos locales y, en consecuencia, tomaron la decisión de impedir las elecciones para alcaldes y concejos municipales por celebrarse en octubre de ese año⁷.

² La mayor parte de la argumentación que sigue está basada en los testimonios de personas que habitan o fueron desplazadas del sur de Bolívar. Debido a la naturaleza del tema que se aborda, las identidades de estas personas son mantenidas en reserva.

³ Sobre este particular se puede consultar: Manuel Alonso E., *Conflictos armados y configuración regional. El caso del Magdalena Medio*, Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia, Medellín, 1997; Martha Cecilia García V., “Las cifras de las luchas cívicas, cuatrienio Barco 1986-1990”, en: *Cinep, documentos ocasionales*, nº 62, Bogotá, 1990; Amparo Murillo P. et al., *Un mundo que se mueve como el río: historia y cultura en la región del Magdalena Medio*, Santafé de Bogotá, ICANH-PNR, 1994.

⁴ Distintos testimonios afirman que las primeras plantaciones de coca en esta zona datan de 1986 y se establecieron en los alrededores de Monterrey (Simití), hasta donde llegaban compradores de los carteles; posteriormente hacen presencia los grupos paramilitares: “[...] La coca fue buen negocio hasta hace cinco años (1998); entraban los compradores del Cartel de Cali, en competencia con los compradores que venían del Cartel de Medellín, entonces al cuál alzara más sus precios, el que diera mayores precios [...] compraban semanalmente doscientos, trescientos kilos (de base de coca), entre ambos; bueno, pero una vez hacen presencia los paramilitares, se adueñan del negocio y empiezan a regir una normas que dicen: ¡El precio es éste y no lo subimos de aquí! El kilo (de base) de coca, que comenzó en quinientos mil pesos, ya estaba en millón ochocientos, lo tenían ahí los carteles; bueno, pues los paramilitares lo plantaron a dos millones y ahí quedó [...]”.

⁵ Ver, por ejemplo, las declaraciones hechas por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Isidoro Galvis, al periódico *Vanguardia Liberal*, 22 de julio de 1997, p. 4B.

⁶ También era indudable que las AUC pretendían cortar el eje horizontal que hacía posible las acciones subversivas desde Urabá, en el noroccidente, hasta Arauca, en el nororiente, y que incluía a todo el sur de Bolívar. Ver Alejandro Reyes P., *Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política en Colombia*, p. 284.

⁷ Ver “La guerrilla intervendría en elecciones”, en *Vanguardia Liberal*, 21 de mayo de 1997, p. 4B.

Lo anterior hizo que el proceso electoral se situara en el centro de una confrontación militar que ascendía. Tanto los paramilitares como la guerrilla utilizaron la coerción como arma política para imponerse frente a la población civil y a los gobiernos municipales. Durante 1997 y 1998, la situación de desplazamiento, parálisis económica, caos administrativo (los alcaldes despachaban desde Cartagena) y crisis de gobernabilidad generada por las presiones y agresiones de los grupos armados fue el rasgo político predominante en el sur de Bolívar⁸.

Al mismo tiempo, las consecuencias de estas elecciones sobre el conflicto armado fueron trascendentes. En Santa Rosa, la naciente élite política y económica entró en una enconada oposición a los grupos guerrilleros y optó por la solución que ofrecían los grupos paramilitares; los políticos de Simití se sumarían poco después a esta decisión. En otros municipios, el cambio frente a la guerrilla fue más lento; San Pablo resistió hasta enero de 1999, cuando fue evidente el dominio paramilitar en la zona “urbana”; en Morales estos grupos alcanzaron lentamente el dominio sobre la vida política y pública de los habitantes de la isla⁹. De alguna manera, la adhesión a la estrategia de los paramilitares significó para muchas administraciones una salida a los problemas de gobernabilidad suscitados por las elecciones de octubre.

En una perspectiva diferente, las marchas campesinas de 1996 y 1998 marcaron otro punto de ruptura de la población civil frente a la guerrilla. Indudablemente el recurso a las marchas sufrió un proceso de desgaste e hizo palpable un fenómeno de alejamiento político entre los sectores que durante largo tiempo habían compartido su participación en ellas¹⁰. De una

parte, las organizaciones comunitarias y sociales que encabezaron sucesivos paros y movilizaciones terminaron señaladas como aliadas incondicionales de la guerrilla y fueron marginadas de la vida pública de los municipios¹¹. De otra parte, los gobiernos locales, elegidos popularmente, decidieron superar la subordinación que mantenían frente a estas organizaciones promotoras de paros y rompieron la obediencia que mantenían frente a la guerrilla para presentar directamente, frente al estado central, las mismas peticiones de inversión social, en calidad de representantes legales de los intereses de la población¹².

En adelante las movilizaciones y los paros cívicos harían aún más evidentes los cambios en las relaciones de poder en el sur de Bolívar. No serían ya las organizaciones sociales y comunitarias sus principales protagonistas; otros actores, antaño subordinados, y otros intereses aparecerían en los sucesos más recientes, ocurridos entre 1999 y 2001. Ciertamente la serie de manifestaciones de inconformidad frente al Gobierno ocurridas en estos años fueron organizadas por los sectores económicos más pudientes (comerciantes, transportadores, narcotraficantes y ganaderos), la clase política local y los gobiernos municipales¹³. Con un signo ideológico contrario, estos fenómenos seguirían conservando su importancia como espacios de expresión de intereses y expectativas frente al estado central.

Aun así, el rasgo característico de las movilizaciones más recientes ocurridas en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio ha sido la oposición a las negociaciones de paz con el ELN¹⁴. En este sentido, los manifestantes se acercaron a los propósitos de las AUC en su afán por asegurar el dominio militar de la zona y obtener reconoci-

⁸ Ver, por ejemplo, “Los concejales entre la espada y la pared”, en *Vanguardia Liberal*, 9 de enero de 1998, p. 3C.

⁹ Testimonios de pobladores de Santa Rosa, Morales y San Pablo.

¹⁰ Las marchas y los paros más importantes ocurrieron en 1971 y 1972, en San Pablo; en junio de 1985, en el sur de Bolívar y en junio de 1987, en buena parte del nororiente del país.

¹¹ Eran comités cívicos, organizaciones de mineros, Juntas de Acción Comunal y organizaciones de izquierda como la Unión Patriótica y A Luchar. Testimonio de líderes campesinos participantes en las marchas de 1996 y 1998.

¹² Así, por ejemplo, en noviembre de 1996, un grupo de seis alcaldes de sur de Bolívar reclamaron el liderazgo de los acuerdos pactados entre el Gobierno y la Marcha Campesina; según ellos, hacían esta petición porque “los acuerdos son manejados en pro de intereses personales de los miembros del Comité Central de la marcha [...]. Los alcaldes insistían en manejar los pactos “porque somos los que conocemos los problemas de la zona y somos los representantes de los municipios ante el Estado”. Ver “Alcaldes del sur exigen liderar los acuerdos de la marcha”, en *El Universal*, 28 de noviembre de 1996, p. 9C.

¹³ Testimonios de pobladores de San Pablo y Morales.

¹⁴ Con excepción de las movilizaciones de pobladores ocurridas entre junio y julio de 2003, como protesta frente a las fumigaciones de plantaciones de coca con glifosato.

miento político del Estado. Como se dijo arriba, el caso de Asocipaz ilustra bien esta intención.

En resumen, se sustenta aquí la idea de que buena parte de las motivaciones de la oposición a las negociaciones entre el Gobierno y el ELN fue resultado del reconocimiento y la expresión de los intereses de las nacientes élites locales y, al mismo tiempo, fue consecuencia de un proceso de deterioro paulatino de las relaciones entre la población civil y los grupos insurgentes, asunto escenificado en las elecciones de 1997 y en las marchas campesinas de 1996 y 1998. En este contexto, las acciones militares de las AUC encontraron cierta justificación ideológica; fundamentalmente entre algunos de los sectores que se beneficiaban de la producción y comercialización de pasta de coca o entre los grupos más afectados por el secuestro y el pago de "contribuciones" a los grupos guerrilleros.

Al mismo tiempo, las élites locales encontraron motivos para movilizar a sectores populares reviviendo el temor a algunos hechos protagonizados por la guerrilla durante su período de "hegemonía". Sin embargo, esta alianza social no fue uniforme en todos los municipios y mostró muy pronto importantes fisuras que significaron el agotamiento de las propuestas sustentadas por Asocipaz.

LAS MOVILIZACIONES DE OPOSICIÓN A LA CONVENCIÓN

Los reiterados anuncios de la desmilitarización de un territorio del sur de Bolívar¹⁵ para celebrar la Convención del Gobierno, la sociedad civil y el ELN, provocaron sucesivas reacciones de grupos de habitantes de distintos municipios

del sur de Bolívar¹⁶, Santander¹⁷, Antioquia¹⁸ y Cesar¹⁹ que organizaron, en el transcurso del año (febrero de 2000, marzo de 2001), una serie de marchas que tuvieron como propósito incomunicar temporalmente el nororiente del país²⁰.

El objetivo fundamental de quienes se oponían a esta decisión presidencial, que daría vía libre a los diálogos de paz con aquella organización insurgente, era establecer cierto margen de representación y de injerencia civil para los sectores que, por diversas razones, temían las consecuencias que podían traer la entrega al ELN de lugares de los cuales había sido expulsado recientemente. En otro plano se proclamaban desconfiados con el proceso de paz y exigían veladamente una solución militar al conflicto; este era un rasgo que caracterizaba una nueva fase de lo que se consideró un movimiento contrainsurgente, extendido para ese entonces a todo el Magdalena Medio²¹.

De alguna forma, con el recurso a la movilización, los manifestantes intentaron emular algunas facetas de las "marchas campesinas" sucedidas en épocas anteriores. No obstante, esta vez el signo ideológico y los propósitos que acompañaban a quienes se oponían a la realización de la Convención eran opuestos o marcadamente diferentes de los que alentaron las pasadas movilizaciones²². Esta vez se pedía –aunque nunca se mencionó explícitamente–, que se reconociera en la mesa de negociaciones los avances territoriales y militares logrados por las AUC y se diera espacio político a quienes, en nombre de un sector de la sociedad civil, compartían esta posición²³. En un sentido más pro-

¹⁵ Al comienzo (1999) se dijo que eran 7.600 km² de los municipios de Santa Rosa, Simití, San Pablo y Morales. Al final (2001) se habló solamente de dos municipios: San Pablo y Cantagallo.

¹⁶ Arenal, Río Viejo, Regidor, Morales, Santa Rosa, Simití y San Pablo.

¹⁷ Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, San Rafael de Lebrija, etc.

¹⁸ Yondó, Puerto Berrió, Puerto Triunfo, etc.

¹⁹ Aguachica, San Martín, San Alberto, etc.

²⁰ Se bloqueó la troncal que comunica el centro del país con la costa Atlántica y se presentaron obstrucciones a la altura de Aguasclaras (Aguachica), en la margen derecha del río Magdalena, y en otros sitios conocidos como La Gómez (Sabana de Torres), La Fortuna Lizama (San Vicente de Chucurí) y Puerto Boyacá (Boyacá).

²¹ Carlos Medina documenta la primera fase de este movimiento, nacido en 1983, que tuvo como epicentro a Puerto Boyacá y como líder más destacado a Pablo E. Guarín. Ver Carlos Medina G., *Ob. Cit.*

²² Particularmente podría considerarse como una "reedición en negativo" del gran paro cívico del nororiente, ocurrido en 1987.

²³ En contraste, en 1996 y 1998, las organizaciones campesinas habían solicitado al Estado el desmonte de los grupos paramilitares; la realización de investigaciones para esclarecer los nexos de estos grupos y miembros activos de las Fuerzas Militares; el respeto y la protección de los derechos humanos; su reconocimiento como ciudadanos con derechos y deberes, etc.

fundo, con este intento se quería advertir sobre la dimensión política de la guerra llevada a cabo contra la subversión y mostrar el amplio apoyo social acumulado alrededor de la estrategia paramilitar.

No obstante, debe advertirse que en el transcurso de tres años de guerra (1997-1999) ciertas diferencias sociales y políticas de la población del sur de Bolívar, manifestadas en el apoyo a alguno de los bandos enfrentados, se habían hecho cada vez más evidentes. Los habitantes de las zonas más distantes y marginadas (colonos y campesinos) parecían identificarse con la guerrilla, y los residentes de los “cascos” urbanos más cercanos, a los paramilitares. Pero, obviamente, la delimitación de estas diferencias ideológicas no era excluyente o, en todos los casos, producto de decisiones y actos individuales libres o voluntarios; muchas veces en su concreción habían desempeñado un papel importante las relaciones de poder y las amenazas de muerte. Además, estas diferencias políticas tenían una traducción más acertada en ciertas zonas donde existía una verdadera división ideológica del espacio²⁴.

En el territorio de estos municipios eran claras las diferencias entre las cabeceras municipales y los corregimientos. Los paramilitares dominaban ampliamente las primeras, mientras que la guerrilla era relativamente fuerte en los segundos, especialmente en aquellos que se encuentran en las partes más altas de la serranía de San Lucas y donde existían yacimientos de oro o pequeñas plantaciones de coca²⁵. Con todo, parecía crecer la franja de territorio en disputa en la que la supre-

macía de cada bando era transitoria²⁶. Esta situación había quebrado la unidad político-administrativa de los municipios y, en distinto grado, había subordinado las organizaciones comunitarias, los gobiernos civiles y las actividades de los partidos políticos a las decisiones de los grupos armados dominantes en cada localidad.

LOS PROTAGONISTAS DE LAS MOVILIZACIONES

Como se dijo, el grupo humano que protagonizó estos hechos era heterogéneo y materializaba en el terreno civil y político la posición defendida por las AUC, en el sentido de oponerse por todos los medios a la celebración de la Convención en el Magdalena Medio. El balance posterior de la respuesta de estos habitantes a la decisión presidencial puede calificarse como “eficaz” en el sentido de que la mayoría de las veces se adelantó a la publicación oficial de la declaración de la zona de encuentro²⁷; concentró por momentos la atención del alto Gobierno y la Unión Europea, que apoyaba los acercamientos de paz; impulsó un proceso organizativo de las “élites” locales en la mayor parte del Magdalena Medio²⁸ y provocó una corriente de opinión a nivel regional y nacional que se identificó con la posición de los manifestantes²⁹.

Durante las sucesivas jornadas de paro y movilización, los organizadores (Asocipaz y la Asociación No al Despeje) se tomaron las cabeceras de los principales municipios del sur de Bolívar (San Pablo, Santa Rosa, Simití y Morales); mantuvieron reunida a la población, que voluntaria-

²⁴ Ciertamente, algunas zonas del sur de Bolívar están segmentadas socialmente por grupos que se oponen rotundamente o apoyan las negociaciones con la guerrilla. Estas divisiones tienen origen en el poblamiento de la zona y las luchas sociales por la tierra que se han vivido allí desde mediados del siglo XX. Una reedición de estos conflictos puede hallarse en el proceso de constitución de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. Ver, por ejemplo, Asociación del Valle del Río Cimitarra, “El valle del río Cimitarra y el Magdalena Medio: una región victimizada por el Plan Colombia y el paramilitarismo de Estado”. En este artículo se hace explícita la posición de uno de estos sectores sociales y políticos con aspiraciones hegemónicas en el sur de Bolívar.

²⁵ Durante mucho tiempo se sostuvo que los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares ocurrían en las zonas (corregimientos y veredas) donde existían grandes cultivos de coca; no obstante, se puede interpretar también que el auge de estos cultivos ocurrió inmediatamente después del arribo de las AUC al sur de Bolívar. Este último argumento relativiza la opinión sostenida por las Fuerzas Militares, según la cual la disputa por las zonas productoras de cultivos ilícitos ha sido el principal objetivo de los grupos irregulares. Podría pensarse incluso que las AUC han sustituido y ampliado las funciones que antes cumplían los carteles de la droga, y la posibilidad de enriquecimiento rápido ha sido un sueño en el proceso de reclutamiento de sus “comandantes” locales.

²⁶ Esta franja se prolonga a lo largo de las estribaciones orientales de la serranía de San Lucas desde Cantagallo, en el sur, hasta Arenal, en el norte.

²⁷ Testimonio de habitantes de Simití y San Pablo.

²⁸ La gran excepción fue Barrancabermeja.

²⁹ Ver, por ejemplo, “Preocupa a bumangueses zona de encuentro para ELN”, en *Vanguardia Liberal*, 16 de febrero de 2001, p. 3A.

mente o por coacción se disponía a ir a las marchas; organizaron comités de vigilancia y distribución de alimentos; arengaron o intimidaron a los asistentes y controlaron totalmente el transporte fluvial y terrestre. Según distintos testimonios, estas acciones fueron adelantadas con el apoyo vedado o abierto de hombres armados que se identificaron como integrantes de las AUC³⁰.

Casi simultáneamente, las autoridades y los sectores económicos y sociales influyentes de otros municipios de Cesar y Santander hicieron pública su solidaridad con la movilización; así, por ejemplo, en Bucaramanga se creó el Comité de Apoyo al sur de Bolívar que reunía a reconocidos políticos y a representantes de Fedegan, Fedegasan, Camacol, Andi, Cotelco, Palmicultores de Santander, etc. Con estos apoyos, la opción paramilitar parecía tener un amplio soporte social a nivel regional, y esto alentaba a los promotores de las marchas para ser cada vez más ambiciosos en sus pretensiones políticas³¹.

Es obvio entonces que quienes con mayores argumentos se oponían a la celebración de la Convención en el sur de Bolívar no eran simplemente campesinos, como reiteradamente lo dieron a entender los medios de comunicación. Para comenzar, los dirigentes de Asocipaz y de “No al Despeje” eran políticos locales que se mantenían en sus cargos debido al fuerte apoyo que recibían de las élites de sus municipios. A su vez, estas élites eran el grupo social básico que impulsaba y mantenía las movilizaciones de protesta; entre sus integrantes se contaban ganaderos, comerciantes, transportadores, medianos y grandes cultivadores de coca, etc. Los campesinos que participaban en los bloqueos de vías eran trabajadores de fincas o pescadores; había también “raspachines” de coca, pobladores “urbanos” y funcionarios de las alcaldías que por distintas razones se mantenían coyunturalmente unidos al movimiento de oposición “al despeje”. Esto, sin contar con el respaldo indirecto de empresarios y políticos de otros municipios y ciudades del Magdalena Medio.

En conclusión, estas movilizaciones no tenían

una inspiración fundamentalmente campesina, tal como ocurrió en 1998 con el éxodo que llegó a Barrancabermeja; por el contrario, en este caso sí se hicieron presentes distintos tipos de pobladores rurales, los gobiernos locales, el sector comercial, los empresarios, y la clase política tuvo un papel protagónico³².

LAS RAZONES DE OPOSICIÓN A LA CONVENCIÓN

La mayor parte de la población residente en las cabeceras municipales tenía razones particulares para oponerse a la celebración de la Convención Nacional en el sur de Bolívar. Temían que este suceso trastocara su vida cotidiana, limitara su libre movilidad y afectara sus intereses políticos y económicos. Todo esto tenía una especial importancia en una zona donde comenzaba a dominar la economía ilícita de la coca (ver tabla 1) y los paramilitares recibían una aceptación subrepticia.

Como se anotó, la oposición más fuerte era la encabezada por las élites locales, compuestas por comerciantes, transportadores, líderes políticos, ganaderos y los nuevos empresarios agrícolas (palmicultores y productores de lácteos). Para este grupo, las contradicciones con la guerrilla eran claramente ideológicas. A esto se agregaba su repudio a los métodos de financiación de los insurgentes (“impuestos” a la producción, secuestro de personas y la apro-

TABLA 1

Extensión de los cultivos de coca en el sur de Bolívar

AÑO	NÚMERO DE HECTÁREAS	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
1992	3.400	
1993	2.300	-32,35
1994	2.000	-13,04
1995	2.100	5,00
1996	2.200	4,76
1997	2.500	13,63
1998	3.500	40,00
1999	5.897	68,50
2000	5.960	1,06
2001	6.149	3,17

Fuente: Proyecto SIMCI.

³⁰ Según algunos testimonios, en Morales un jefe de las AUC, “El Llanero”, reunió a la población para organizar las marchas de oposición a la Convención.

³¹ El presidente de Fedepalma llegó a anunciar la paralización de las inversiones de palma africana previstas en el sur de Bolívar. “Nuevo despeje frena inversión en palma”, en *El Universal*, 7 de febrero de 2001, p. 2A.

³² En 1998 fue reiterada y visible la negativa de los sectores políticos y sociales dominantes a participar en el éxodo campesino a Barrancabermeja. Ver, por ejemplo, “Campesinos rechazan orden de paro del ELN”, en *Vanguardia Liberal*, 8 de julio de 1998, p. 4D.

piación de ganado)³³ y la suposición de que la Convención significaría un retroceso en sus intenciones de integración política y económica al resto del Magdalena Medio.

Para esta élite, la creación de una zona desmilitarizada suponía una tardía legitimación de la dominación de la guerrilla, no solo en el sur de Bolívar sino en todo el Magdalena Medio, con la amenaza adicional de que el ELN se encontraría muy cerca de importantes ciudades como Barrancabermeja, Aguachica y Bucaramanga, epicentros de la actividad económica de un vasto sector del oriente del país. Además, se temía que se pusiera en riesgo la producción y el suministro de petróleo de Ecopetrol en Casabe (Yondó) y Cantagallo³⁴.

De otra parte, existía ya cierto grupo de “empresarios” de la coca que debían su prosperidad económica a la protección que recibían, básicamente, de los grupos paramilitares y a la complicidad de las autoridades de control (ejército y policía) con respecto a la entrada de precursores químicos para el procesamiento del alcaloide. Este negocio funcionaba bien en condiciones de clandestinidad y en espacios donde era posible garantizar –a través del soborno, la corrupción de las autoridades o el pago de cuotas a los grupos armados– el tránsito de insumos, el desplazamiento de trabajadores (raspachines), la instalación de “laboratorios” de procesamiento y la salida de la mercancía a otras zonas del país. En estas circunstancias, la instalación de una zona para la Convención suponía, paradójicamente, un verdadero control del Estado y una presencia más cercana de instituciones nacionales e internacionales que harían menos

eficiente o bloquearían el funcionamiento del circuito de la producción y procesamiento de la coca³⁵.

Se sabía que en los puntos de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional se contemplaba un ambicioso programa de inversión social, apoyado por la Unión Europea, y se pondría en marcha un proyecto de erradicación de cultivos ilícitos³⁶. Estas iniciativas tendrían hondas repercusiones para los habitantes del sur de Bolívar, quienes dependían cada vez más, directa o indirectamente, de la economía de la coca³⁷. Además, los pobladores temían que el despeje sirviera de excusa para aumentar el reclutamiento de jóvenes para las filas insurgentes o facilitara las retaliaciones de la guerrilla contra aquellos que, por distintas razones, habían apoyado o se habían mantenido callados ante la entrada de los paramilitares; también contra quienes habían llegado o retorna do luego de la entrada de éstos³⁸.

Al mismo tiempo, los gobiernos municipales se veían amenazados por el poder que adquiriría la guerrilla, como efectivamente se habían visto perjudicados sus intereses en las elecciones de 1997. Además con el “despeje” se crearían “veedurías populares” y la guerrilla intentaría resquebrajar las redes electorales que habían sustentado en el poder a muchos alcaldes del sur de Bolívar. También, pensaban que se le facilitaría a la guerrilla avanzar en sus planes estratégicos de consolidar un “poder popular” en contravía directa a los presupuestos del proceso de descentralización e, incluso, de algunas garantías constitucionales. El ELN aspiraba a participar en la construcción de un nuevo orden constitucio-

³³ Según algunos testimonios, durante los años ochenta, el ELN echó a perder un acuerdo entre el Fondo Ganadero de Santander, Ecopetrol y los campesinos para el levante de ganado vacuno en San Pablo con la imposición de “vacunas” y la proliferación de amenazas a los productores.

³⁴ Esta producción se calculaba en 12.400 barriles de crudo diarios; más 2 millones de pies cúbicos de gas.

³⁵ En febrero de 2001, durante la “Operación Simón Bolívar”, el ejército desmanteló en San Blas (Simití) cinco laboratorios que procesaban cerca de cinco mil kilos de base coca al mes. Estos laboratorios eran propiedad de las AUC. Ver “Destruyen fortín de las AUC”, en *El Universal*, 17 de febrero de 2001, p. 2A.

³⁶ Se comenzaba a perfilar lo que sería el primer “Laboratorio de Paz” en el Magdalena Medio. Ver, por ejemplo, “Sustitución de cultivos”, en *Vanguardia Liberal*, la página Magdalena Medio, 15 de enero de 2001, p. 6B.

³⁷ Según información de la Gobernación de Bolívar, se producen 15 toneladas anuales de base de coca en los siete municipios del sur del departamento. De acuerdo con datos no oficiales, esta producción alcanza las 34 o 35 toneladas anuales.

³⁸ Según Codhes, entre 1999 y 2001, cerca de 26.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de los municipios del sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra. Oficialmente se calcula que la población actual de esta zona asciende a 173.259 habitantes, es decir, se ha desplazado a cerca del 15% de este total.

nal, y los municipios del sur de Bolívar podrían servir de “laboratorio” para este proyecto³⁹.

Finalmente, aunque sucesivamente dos comisionados de paz habían insistido en que esta experiencia sería distinta a la ensayada en el Caguán (con las FARC), en opinión de muchos habitantes todavía no eran públicas ni precisas sus características⁴⁰. De alguna forma, esta incertidumbre justificaba la protesta ante el Estado y la guerrilla que, en opinión de muchos, tomaban decisiones sobre el territorio de estos municipios sin consultar previamente a los habitantes⁴¹. Ciertamente, muchos sectores sociales mostraban en la práctica que no se sentían representados o no entendían a fondo las reivindicaciones naciona- listas de los herederos del cura Pérez.

En otras palabras, más allá de las justificacio- nes ideológicas y las consideraciones estra- tégicas del conflicto armado, era evidente que la celebración de la Convención lesionaría mu- chos intereses particulares que apenas unos meses atrás se habían visto fortalecidos o reva- lidados con la instauración del orden para- militar. También podía interpretarse que la Convención constituiría un atentado contra el orden económico forjado por el circuito de la coca y, en el terreno político, podía significar el menoscabo del ordenamiento institucional emanado de la Constitución de 1991. Se pre- sentaba así una suerte de imbricación regional entre elementos ilegales o exteriores a la institucional formal y componentes legales o legítimos dentro del ordenamiento institucional que dieron soporte y aliento a esta serie de protestas y movilizaciones.

EL NACIMIENTO DE ASOCIPAZ Y SUS RELACIONES CON EL ESTABLECIMIENTO

Según distintos testimonios, el movimiento que se oponía a la Convención tenía un fuerte respaldo de los gobiernos municipales, reunidos en Asosur⁴², de la Gobernación de Bolívar y de al- gunos funcionarios del estado central, concreta- mente del Ministerio del Interior. La forma rápida como reaccionaron los opositores a la decisión del Gobierno, antes de que ésta fuera dada a co- nocer a la opinión pública, el tipo de

movilizaciones regionales que protagonizaron y

los resultados que obtuvieron durante los proce-

dos de negociación, serían las pruebas más claras

de la estrecha relación entre esferas de poder en el orden local y nacional⁴³. Además, las fuerzas mi- litares reaccionaron de forma inusualmente tran- quila y no impidieron la reiterada organización

de movilizaciones y bloqueos de vías, aun cuando

existían indicios de que los paramilitares y los

narcotraficantes las apoyaban activamente⁴⁴.

Como se dijo, era claro que el comportamien- to de las facciones partidistas de la zona y los go- biernos municipales frente a las movilizaciones de oposición a la Convención tenía como refe- rente los drásticos cambios en las relaciones de poder ocurridos en el sur de Bolívar desde 1997⁴⁵; sin embargo, la consecuencia más impor- tante de las movilizaciones organizadas durante 2000 y 2001 fue la constitución de Asocipaz como una organización de carácter regional y ci- vil que intentó canalizar políticamente los efec- tos de las protestas. En efecto, esta organización se proclamó como la representante de las comu- nidades del sur de Bolívar⁴⁶ y en esta condición

³⁹ El uso del mismo término “laboratorio” por parte del ELN y los embajadores de la Unión Europea ayudó a crear cierta confusión entre los habitantes del sur de Bolívar.

⁴⁰ Dado que las FARC mantienen presencia en esta zona, solicitaron también hacer parte de la mesa de negociación de la Convención Nacional.

⁴¹ Estas decisiones eran claras dentro de la negociación directa entre el Gobierno y el ELN, pero no eran de dominio público en el Magdalena Medio.

⁴² Esta asociación de municipios se había creado unos años atrás. Ver “Los municipios del sur de Bolívar se asocian”, en *Vanguardia Liberal*, 26 de agosto de 1996, p. 2B.

⁴³ Testimonio de pobladores de San Pablo y Simití.

⁴⁴ Así lo declaró el alto comisionado de paz, Camilo Gómez, en febrero de 2001: “[...] todo mundo conoce con claridad la interferencia del narcotráfico y del paramilitarismo en el problema de la zona en el sur de Bolívar. Eso es claro y preciso. El país no se puede privar de un proceso de paz por cuenta de factores agravantes como esos [...]”. Tomado del periódico *El Universal*, 6 de febrero de 2001, pp. 1A y 9B.

⁴⁵ Otro antecedente de importancia en la indisposición entre élites locales y guerrilla puede rastrearse en la historia de la explotación de minas de oro en la serranía de San Lucas. Al respecto hay algunas referencias, por ejemplo, “El líder del sur de Bolívar”, en *El Universal*, 12 de febrero de 2001, p. 4B.

⁴⁶ En realidad, Asocipaz estaba compuesta por dos delegados de 24 municipios de distintos departamentos del país (sin unidad ni continuidad territorial) y en este sentido podía ser considerada como una expresión nacional antes que específica del sur de Bolívar.

comenzó a desempeñar un papel de interlocutor frente al Estado en asuntos de inversión social y de desarrollo. Incluso se presentó como la abanderada de causas que no protagonizó; por ejemplo, las movilizaciones campesinas de 1996 y el éxodo a Barrancabermeja en 1998.

Paradójicamente, Asocipaz mostró una organización interna muy débil. Sus principales sedes fueron los municipios de Santa Rosa del Sur y San Pablo, en los cuales fue representada públicamente por unas pocas personas (entre ellas Celso Martínez). En otros municipios como Morales o Cantagallo su presencia directa fue menos visible. En esencia, su organización en el sur de Bolívar consistió en una división estratificada por células o núcleos municipales que tenía una dirección centralizada en Santa Rosa. Esta situación hace suponer que muchos de sus impulsores reales decidieron mantener un bajo perfil y canalizaron buena parte de su proyección regional y nacional a través del Movimiento No al Despeje. Además, el recién creado Bloque Central Bolívar de las AUC representó un papel clave al “garantizar” las condiciones de seguridad a los actividades de Asocipaz y ejercer diferentes grados de coerción sobre la población para mantener la movilización durante el tiempo que fuera necesario⁴⁷.

Aun así, el poder político informal que ejercía Asocipaz, y sus promotores sociales, por encima de los gobiernos municipales, se materializó muy pronto en acciones autoritarias y coactivas. En los municipios del sur de Bolívar controló la distribución de bienes y la prestación de servicios (comida, transporte fluvial, etc.), durante la declaración de los paros locales y retuvo a la población como medida de presión ante los anuncios del “despeje” para celebrar la Convención. En efecto, en los días de paro las únicas personas que pudieron movilizarse libremente por la región eran los líderes de Asocipaz o aquellas que estaban organizadas en comités y contaban con el permiso de los paramilitares. Además algunos alcaldes y funcionarios locales (Morales, Santa Rosa, Arenal) se involucraron en los paros y bloqueos de las vías o sirvieron de intermediarios entre los marchistas y el Gobierno central.

Con todo, Asocipaz y sus promotores hicieron un gran esfuerzo para mostrar al Gobierno Nacional que contaban con una base social que podían movilizar en cualquier momento en defensa de una causa que favorecía el orden recientemente impuesto. Al mismo tiempo, la más activa

de todas las élites locales, la de Santa Rosa del Sur, parecía consolidar su protagonismo regional. Prueba de todo lo dicho es el texto del acuerdo final entre el Gobierno y los “campesinos” representados por Asocipaz:

EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS CAMPESINOS DEL SUR DE BOLÍVAR, SUR DEL CESAR, MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO, BAJO CAUCA, NORDESTE ANTIOQUEÑO Y NORDESTE NORTESANTANDEREANO, DECLARAN:

- 1 Que la paz es un valor supremo de la nación. Es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento, que vincula a todos los ciudadanos y al Gobierno.
- 2 Que la construcción de la paz por parte del Estado debe vincular a la población civil.
- 3 Que para ello, los suscritos campesinos nos constituyimos en “Asociación Civil para la paz de Colombia, Asocipaz, y el Gobierno Nacional se compromete a promover su organización y donar un capital semilla para su adecuado funcionamiento.
- 4 Que los espacios para la construcción de la paz en Colombia no pueden significar el despeje de la sociedad civil y ésta debe participar en su diseño.
- 5 Que los campesinos han sido informados que el Gobierno Nacional viene llevando a cabo acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para definir los mecanismos que nos conduzcan a una paz negociada, mediante la celebración de una Convención Nacional y la negociación con el Gobierno.
- 6 Que los campesinos han reiterado al Gobierno Nacional la inconveniencia de una zona de distensión en los cinco municipios del sur de Bolívar por sus efectos y coletazo tanto en la región misma como en el área de incidencia.
- 7 Que los suscritos campesinos consideran su deber actuar como protagonistas en el proceso en curso, para que con su intervención sea posible dar vida a una zona de convivencia, por el respeto a la vida, la libertad y el reencuentro para la reconciliación de los colombianos.
- 8 Que por tal virtud, el Gobierno se compromete a crear un espacio de interlocución entre el Estado y el ELN.
- 9 Que para estos efectos, los campesinos solicitan el acompañamiento y una verificación nacional e internacional.

⁴⁷ Algunos testimonios mencionan el asesinato de personas sospechosas de ser “infiltradas” de la guerrilla, durante las jornadas de bloqueos de vías.

- 10 Que organizados como Asociación, los campesinos se darán un Directorio con adecuada representación regional, cuya sede será el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. El Gobierno ofrecerá garantías para su funcionamiento y movilización.
- 11 Que a partir de la fecha se define la puesta en marcha de las mesas de trabajo sobre inversión social, para evaluar los puntos del pliego de peticiones campesinas, que deberán instalarse en Santa Rosa del Sur el próximo 22 de febrero. Estas mesas deberán evaluar los acuerdos de las marchas campesinas de 1996 y 1998.

Dado en Aguasclaras, Aguachica, sur del Cesar, primer municipio modelo de paz en Colombia, el 17 de febrero de 2000.

De los sucesos de Aguasclaras se puede concluir que Asocipaz fue el espacio en el que se aglutinaron *temporalmente* distintos e importantes sectores de la población civil dentro de un proyecto contrainsurgente y, gracias a esto, alcanzaron un alto nivel de coordinación política y social de sus actividades en todo el Magdalena Medio. No es azar que el término Convención Nacional, largamente estudiado y publicitado, fuera sustituido de la noche a la mañana por el de Zona de Convivencia, luego de los acuerdos de Aguasclaras; con este cambio se daba reconocimiento a otro tipo de injerencia de la población civil local en la negociación con el ELN⁴⁸. Igualmente, mediante el recurso a las movilizaciones, las AUC se estaban jugando a fondo una carta política para recibir re-

conocimiento oficial; todo esto lo hacían sin un gran desgaste, a través de Asocipaz⁴⁹, y con resultados más efectivos que los conseguidos por los campesinos del éxodo⁵⁰.

EL INTENTO DE CONSTRUIR UN MOVIMIENTO CONTRAINSURGENTE

Con el Acuerdo de Aguasclaras, Asocipaz logró un reconocimiento institucional que no alcanzó el de la Mesa de Voceros Campesinos del éxodo en un proceso más largo y dramático⁵¹. Su propuesta de injerencia en el desarrollo operativo de la Convención y la negociación entre el Gobierno y el ELN fue aceptado por el ministro del Interior, lo mismo que su petición de obtener la realización de obras de desarrollo, en contraprestación de su reconocimiento a la creación de una zona de distensión en el sur de Bolívar. Muy pronto se instalaron las mesas de trabajo para determinar el “plan de inversión social” para la Zona de Convivencia; Asocipaz actuaba allí como único interlocutor del Gobierno central⁵².

Con todo, entre abril de 2000 y mayo de 2001, se hicieron dos nuevos intentos por delimitar la zona desmilitarizada para la Convención y dar inicio a las negociaciones “bilaterales”. En abril, el gobierno de Pastrana y la cúpula del ELN acordaron el despeje de tres municipios: San Pablo, Cantagallo y Yondó. Éstos serían los últimos intentos, luego de descartar la inclusión de Simití y Santa Rosa dentro del espacio cedido temporalmente al ELN. Igualmente, en estas oportunidades “todo” el Magdalena Medio se alzó para oponerse a esta decisión⁵³. Asocipaz

⁴⁸ Esta organización pensaba representar los intereses más débiles del orden social a escala nacional; sin embargo, los intereses más poderosos en el orden regional respaldaban directa o indirectamente el proyecto de las AUC.

⁴⁹ Pese a las declaraciones públicas de algunos de los principales líderes de Asocipaz y de “No al Despeje” (Celso Martínez, Carlos Clavijo, Lincoln Castilla, Eliseo Acevedo) no les fue posible demostrar su distanciamiento o independencia frente a las AUC. Incluso uno de ellos, Leonel Uribe, secretario de Gobierno de Yondó y, posteriormente, personero de Sabana de Torres, llegó a reconocer frente al procurador general de la Nación que era integrante de las AUC.

⁵⁰ La construcción de la moderna carretera en el eje Cerro Burgos-Simití-Santa Rosa es una prueba contundente de la efectividad y las limitaciones de las acciones de Asocipaz, a través de la combinación de la protesta y las relaciones con distintos funcionarios o instituciones del Estado. Esta carretera se construyó en una zona rodeada de ciénagas y humedales, y se encuentra actualmente aislada de la red vial que comunica al Magdalena Medio con el resto del país.

⁵¹ La “Mesa de Voceros” fue la organización que representó a las organizaciones campesinas durante el éxodo de 1998 a Barrancabermeja.

⁵² Durante estas jornadas, Asocipaz pidió al Gobierno reconocimiento como legítimo representante de las comunidades en lo referente a la inversión social en la zona minera de Santa Rosa, Arenal y Río Viejo. De esta forma desconocía el trabajo anterior realizado por la organización Asoagromisbol.

⁵³ Las organizaciones sociales, las instituciones y el gobierno de Barrancabermeja, lo mismo que el gobernador de Santander, Miguel Jesús Arenas, fueron los únicos sectores políticos que respaldaron esta decisión presidencial. El gobernador de Bolívar, Miguel Raad H., la aceptó a regañadientes.

modificó su posición de aceptar un despeje condicionado y declaró que no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia⁵⁴.

Así, en mayo y en junio de 2000 se realizaron nuevamente bloqueos a las principales vías de comunicación⁵⁵, y los grupos paramilitares rodearon el territorio de los tres municipios por despejar. Se amplió a todo Santander, Bolívar y Cesar el movimiento de oposición a las negociaciones con el ELN, y después de varios intentos por convencer a sus detractores, el Gobierno echó nuevamente atrás la decisión de celebrar la Convención Nacional en el sur de Bolívar⁵⁶. Esto constituyó un nuevo triunfo para Asocipaz que seguía declarando en público que no se oponía a un proceso de paz con el ELN en otro lugar del país o del exterior⁵⁷. Se organizaron manifestaciones en todos los municipios del sur de Bolívar y se mantuvo la movilización civil de oposición a la Convención durante semanas. Por ejemplo, en San Pablo algunos habitantes se tomaron por varios días las sedes de las instituciones gubernamentales; en Morales estuvo a punto de ocurrir un enfrentamiento armado entre defensores y opositores a la zona desmilitarizada, situación que medió y resolvió el párroco del municipio, y en Yondó hubo una movilización que contó con el apoyo de la Alcaldía e involucró a los habitantes de algunos corregimientos donde las AUC tenían cierto respaldo popular⁵⁸.

Como se mencionó, otro hecho significativo fue la conformación de la Asociación “No al Despeje”, que agrupó a sectores sociales y políticos de cerca de 40 municipios de todo el país⁵⁹. De hecho, fue este movimiento el que encabezó, junto con Asocipaz, las negociaciones con el Gobierno, realizadas en el sector de Lizama (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá) en mayo de 2000, y que condujeron nuevamente a la clausura de las posibilidades de celebrar la Convención en el sur de Bolívar. Se puede decir entonces que a nivel local, Asocipaz, y a nivel regional y nacional, “No al Despeje”, fueron las organizaciones políticas a través de las cuales, poderosos intereses contuvieron la decisión presidencial de negociar con el ELN. Además, estas organizaciones pretendieron ser las bases del nuevo movimiento social contrainsurgente nacido en el Magdalena Medio. La aparente fortaleza política de este movimiento se mostró en el respaldo que obtuvo de los gremios de la producción de Santander y en el “forzado” paro económico⁶⁰ que se mantuvo durante casi un mes en todo el nororiente colombiano y que amenazó con lesionar sensiblemente la economía de esta zona del país⁶¹.

Dado que en principio no compartían el recurso al taponamiento de vías y al paro de transporte, los gremios de Santander crearon un “frente unido” que realizó alianzas con sectores

⁵⁴ De nada sirvió que el ELN prometiera respetar las autoridades civiles y políticas, aceptara la conformación de una guardia cívica y permitiera el acompañamiento y la verificación del proceso que se llevaría a cabo durante la Convención. Ver “Gobierno le despejará Yondó, Cantagallo y San Pablo al ELN”, en *Vanguardia Liberal*, 25 de abril 25 de 2000, p. 3A, e “Incertidumbre en el sur de Bolívar por despeje”, en *El Universal*, 25 de abril de 2000, pp. 1A y 2A.

⁵⁵ Fueron siete los puntos bloqueados sobre la “Troncal de la Paz”: en la Mata y Aguasclaras (Cesar), en Puerto Araújo y Puerto Parra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Honda (Tolima).

⁵⁶ Esta vez los manifestantes más radicales amenazaron con “tomar las armas” si el Gobierno creaba la zona desmilitarizada. Por su parte, el Gobierno aseguró que no decretaría ninguna zona de distensión para celebrar negociaciones con la guerrilla sin antes informar y consultar a la ciudadanía de los municipios afectados.

⁵⁷ Carlos Castaño propuso realizar la Convención en zonas remotas del departamento de Córdoba o del municipio de Tiquisio. Con estas propuestas se intentó humillar al ELN.

⁵⁸ Testimonios de habitantes de San Pablo y Morales.

⁵⁹ Aunque este movimiento tenía su radio de acción en ocho municipios (Cimitarra, Yondó, Puerto Parra, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá y Puerto Salgar) convocó a un grupo más grande de municipios entre los que se encontraban: 1) de Santander: Sabana de Torres, Puerto Wilches, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Río Negro y Lebrija; 2) de Norte de Santander, Caldas y Tolima, respectivamente: La Esperanza, La Dorada y Honda; 3) de Antioquia: Cáceres, Caucasia, Valdavia, Tarazá, Sonsón y Carepa; 4) de Cesar: Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria, Gamarra, Pailitas y Pelaya.

⁶⁰ Reiteradas veces estos gremios rechazaron los métodos de Asocipaz y de la Asociación “No al Despeje” para promover su causa; sin embargo, poco a poco fueron radicalizando su posición hasta admitir la posibilidad de realizar un paro económico por voluntad propia para impedir la celebración de la Convención en el sur de Bolívar. Ver “Gremios dispuestos a parar por No al Despeje”, en *Vanguardia Liberal*, 27 de mayo de 2000, p. 3A.

⁶¹ Segundo algunos cálculos, este paro arrojó pérdidas cercanas a los 100 mil millones de pesos en el departamento de Santander. Ver “El Congreso buscará un acuerdo para el despeje”, en *Vanguardia Liberal*, 21 de junio de 2000, p. 3A.

políticos y económicos de departamentos limítrofes, y buscó “mecanismos legales” para presionar al Gobierno con el fin de impedir el despeje de los mencionados municipios. El 24 de mayo de 2000 hicieron pública la siguiente carta:

SEÑOR DOCTOR
ANDRÉS PASTRANA ARANGO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ

Los gremios de Santander, ANDI, Fenalco, Cámara de Comercio, Acopi, Camacol, Sociedad Santandereana de Ingenieros, Sociedad Santandereana de Arquitectos, Fedegasan, Fenavi, Lonja de Propiedad Raíz de Bucaramanga, Porcicultores de Santander, Sociedad de Agricultores de Santander, Palmicultores de Santander, Acicam, Cotelco y los empresarios santandereanos, reunidos en el día de hoy en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, queremos dejar claridad y fijar nuestra posición en referencia al conflicto que actualmente vive Colombia con la nueva zona de distensión proyectada en el Magdalena Medio:

Primero: La paz es la necesidad obligada y más urgente en la reconstrucción de Colombia. Es nuestro deseo y decisión participar en cuanto sea necesario para ayudar a lograrla, y por ello vemos muy positiva toda labor encaminada a su búsqueda.

Segundo: Manifestamos nuestro rechazo a la zona del despeje en el Magdalena Medio. Estratégicamente para Santander y el país, exponer más a Barrancabermeja constituye un riesgo imposible de asumir, además que el río Magdalena junto con la carretera Troncal de la Paz son las vías más importantes de transporte y comunicación de la costa Atlántica con el interior del país.

Tercero: Rechazamos los procedimientos utilizados hasta el momento con los pobladores del Magdalena Medio: Yondó, Cantagallo y San Pablo, por cuanto el Gobierno adquirió compromisos con el ELN sin tenerlos en cuenta.

Cuarto: La situación de Santander es crítica por

todos los problemas que esta decisión ha creado. La industria avícola, la más importante de la región, que genera más de 125.000 empleos en este departamento, está desapareciendo ante la imposibilidad de transportar sus insumos y vender sus productos. También la industria molinera, los transportadores, exportadores y el comercio estamos corriendo grave riesgo. Por lo anterior, de no tomarse una decisión inmediata, la economía del departamento podría abocarse a la quiebra, con grave incremento del desempleo y sus consecuencias en el orden público de la región.

Quinto: Por estas razones, queremos solicitarle, señor presidente de la República, que rectifique la decisión tomada y que se busquen alternativas diferentes para pactar con el ELN, donde se tenga en cuenta y respete la voluntad de las comunidades implicadas.

Señor presidente, por favor no más ingredientes de angustia⁶².

De esta forma, con el recurso a la movilización social, la protesta y al paro, nació un movimiento contrainsurgente en el sur de Bolívar que organizaría una red de apoyo político y económico a todo lo largo y ancho del Magdalena Medio. La emulación de los métodos utilizados en los años anteriores por las organizaciones campesinas sirvió para alcanzar el reconocimiento oficial y la institucionalización de sus reivindicaciones. El agregado de intereses sociales que logró polarizar a su favor fue la clave del éxito de este movimiento.

Aun así, entre febrero y mayo de 2001 se reeditó la historia de paros y bloqueos, y los actores volvieron a asumir sus papeles de manera casi idéntica⁶³, sólo que esta vez el Gobierno Nacional fue más lejos y acusó a los dirigentes de Asocipaz⁶⁴ de estar ligados a los intereses de narcotraficantes y paramilitares⁶⁵. Para el Gobierno era evidente que el área sembrada de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar sobrepasaba las 6.000 hectáreas⁶⁶ y los paramilitares eran mucho más que simples inter-

⁶² Tomada del periódico *Vanguardia Liberal*, 25 de mayo de 2000.

⁶³ Esta vez los taponamientos fueron terrestres (sobre la Troncal de la Paz) y fluviales (en el río Magdalena). Fue significativo que en estos hechos participaron habitantes de algunas comunas de Barrancabermeja y del corregimiento de El Centro; esto no había sucedido antes.

⁶⁴ Esta vez Asocipaz intentó mostrar un mayor grado de organización local y regional. Los voceros de esta organización eran más numerosos y distintos a los que encabezaron las protestas anteriores.

⁶⁵ Ver “Narcotraficantes y paramilitares financian marchas”, en *El Universal*, 17 de febrero de 2001, p. 1A.

⁶⁶ Según el Simci, el área sembrada de coca en el sur de Bolívar, en 2001, era de 6.148 hectáreas; distribuidas en siete municipios, y especialmente en zonas rurales dominadas por los paramilitares (Santa Rosa y Simití). Ver Proyecto Simci, Área de cultivos ilícitos de coca, censo 1º. de noviembre de 2001.

mediarios o facilitadores de la comercialización o procesamiento de la coca; en realidad, estos grupos se estaban convirtiendo en sofisticadas estructuras clandestinas que organizaban la compra de la base de coca, fijaban precios a los productores, cobraban “tarifas” sobre la misma producción, delegaban a personas de toda su confianza la compra del alcaloide⁶⁷, montaban y vigilaban los laboratorios de procesamiento dentro y fuera del sur de Bolívar y sacaban el clorhidrato de cocaína hacia las rutas de transporte internacional⁶⁸. Eran verdaderos “carteles” en ciernes, que hacían todo esto al amparo de la coacción y del poder territorial que poseían.

En este contexto, los alcaldes optaron por recobrar cierto protagonismo frente al Estado y la comunidad internacional⁶⁹. A esto contribuyó la situación de creciente agotamiento de los argumentos de Asocipaz para oponerse a la negociaciones de paz, las fuertes presiones de las AUC, el descrédito de algunos líderes de Asocipaz y el anuncio de la Unión Europea de invertir recursos significativos para el desarrollo del sur de Bolívar⁷⁰. Los ojos y las acciones de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos y la Unión Europea estaban puestos en esta zona, y cada vez era más difícil ocultar las razones y los intereses reales que se movían detrás de las palabras de los líderes de Asocipaz. Por su parte, los alcaldes intentaban “institucionalizar” el flujo de recursos y los beneficios que se derivarían de la inversión internacional.

En este sentido fue significativa la posición de algunos gobiernos locales de mantenerse “al margen” de la organización de las nuevas jornadas de protesta contra el “despeje”, realizadas en

febrero de 2001; esta posición contrastaba con la mantenida apenas un año antes. Poco tiempo después también Asocipaz parecía flexibilizar sus argumentos frente a la posibilidad de realizar la Convención⁷¹, y por esta razón surgieron fuertes desacuerdos entre Celso Martínez y Carlos Castaño.

Sin embargo, en abril de 2001, las AUC volvieron a lanzar una ofensiva contra los campamentos del COCE en el sur de Bolívar; el resultado nuevamente fue la paralización del proceso de negociación: el cronograma de conversaciones entre el ELN y el Gobierno se interrumpió; la guerrilla acusó al Ejército y a los paramilitares de actuar unidos y ser enemigos de la paz; el presidente reclamó a las Fuerzas Armadas lealtad, y Asocipaz y “No al Despeje” pidieron al Gobierno buscar otras alternativas dado que el ELN no estaba en capacidad de defender la zona que reclamaba para la Convención⁷². Todo esto sucedía mientras se realizaban las primeras fumigaciones a los cultivos de coca en cumplimiento del Plan Colombia⁷³. Por todo lo anterior, el ELN suspendió los acercamientos con el Gobierno, mientras los opositores a las negociaciones de paz vieron en la ofensiva de las AUC y en la realización de las fumigaciones la oportunidad de esgrimir nuevos argumentos y reafirmarse en su posición.

Aunque en mayo de 2001 se repitió el juego de los acercamientos entre el ELN y el Gobierno, y ocurrieron paros y bloqueos de vías, el tema que más atención despertó fue la aplicación de la política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos (fumigaciones con glifosato) y la puesta en marcha de programas de desarrollo alternativo en el sur de Bolívar⁷⁴. De esta forma el Gobier-

⁶⁷ Distintos testimonios insisten en que las AUC han ahuyentado o eliminado a antiguos y distintos intermediarios en la comercialización o en el procesamiento de base de coca en esta zona del país. Desaparecieron los “chichipatos”, los “traquetos” y los “paracaídistas”, nombres dados en algunas zonas del país a este tipo de intermediarios; los que hoy permanecen en funciones dependen directamente de las AUC o del llamado “Cartel de Aguachica”.

⁶⁸ Al mismo tiempo, las AUC ejercían control sobre la gasolina robada a Ecopetrol y su transporte a las zonas productoras de base de coca.

⁶⁹ Ver “Alcaldes del sur también tienen voz”, en *El Universal*, 9 de febrero de 2001, p. 3A.

⁷⁰ Ver “Europa da apoyo al sur de Bolívar”, en *El Universal*, 10 febrero de 2001, pp. 1A y 5B.

⁷¹ Ver “Apoyo a la marcha del No al Despeje”, en *El Universal*, 17 de febrero de 2001, p. 5B; “Otro rumbo para la paz”, en *El Universal*, 17 de marzo de 2001, pp. 1A y 2A.

⁷² “Piden congelar la zona de encuentro”, en *El Universal*, 17 de abril de 2001, pp. 1A y 2A.

⁷³ Las fumigaciones amenazaban con “desestabilizar” la economía del sur de Bolívar.

⁷⁴ Esto se concretaría poco después en el diseño y la ejecución de proyectos productivos de palma africana, cacao y yuca industrial apoyados por dependencias oficiales (Plante, Finagro) y entidades como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpm).

no combinaba el componente de coacción con la inversión social en una estrategia de ejecución relacionada con el Plan Colombia⁷⁵. De otra parte, las FARC y el ELN intensificaban su ofensiva contra las AUC y colocaban en peligro la seguridad de los integrantes de Asocipaz, quienes, atemorizados, demandaron mayor presencia de las fuerzas armadas en las cabeceras municipales⁷⁶. Esta conjunción de hechos y las acusaciones de corrupción a sus directos, marcaron el ocaso de Asocipaz.

En conclusión, la dinámica de movilización generada por Asocipaz para consolidar un movimiento contra-insurgente mostró muy pronto sus limitaciones. Entre los factores que agotaron este proyecto se pueden contar: el endurecimiento del Gobierno Nacional frente a las reivindicaciones de los marchantes; el reconocimiento oficial de la ampliación de los cultivos de coca y el inicio de las fumigaciones con glifosato; la constante interferencia de las AUC en las propuestas y las acciones de Asocipaz; la intensificación de la presencia de organismos internacionales (BIP, Acnur, PNUD, OIM); la ejecución del Plan Colombia en su doble versión, militar y social⁷⁷; el apoyo de la Unión Europea al proceso de paz y la inversión en programas sociales⁷⁸; el fortalecimiento de la presencia guerrillera en ciertas zonas y el distanciamiento entre algunos gobiernos municipales (Santa Rosa y San Pablo) y los líderes de Asocipaz. Como epílogo se puede decir que, para la mayoría de los habitantes consultados, la presencia institucional y el ascendiente político de Asocipaz son hechos del pasado.

LA FRUSTRADA PROYECCIÓN POLÍTICA DE ASOCIPAZ

Esta organización proyectó los intereses de los grupos locales dominantes en el sur de Bolívar en una coyuntura especial que combinaba los esfuerzos de paz entre el Gobierno Nacional y una organización insurgente y la ofensiva desatada por las AUC en un momento en el que buscaban un reconocimiento político equiparable al de la guerrilla⁷⁹.

Así, durante todo el año 2000, Asocipaz vivió un período de fortalecimiento que alcanzaría su mayor proyección en las elecciones locales de octubre⁸⁰; sin embargo, muy pronto fueron evidentes sus limitaciones como proyecto político. En mayo, las AUC anunciaron su intención de intervenir el proceso electoral con el objetivo de garantizar su “transparencia”⁸¹. En sus comunicados públicos, este grupo irregular pedía a los candidatos un compromiso real con sus programas de gobierno; veladamente se otorgaba el derecho de vetar o de avalar los candidatos a las alcaldías y concejos. Todos los aspirantes, de una u otra manera, debían contar con el visto bueno o por lo menos con la indiferencia de las AUC frente a sus intenciones políticas. Esto sucedió a lo largo y ancho del sur de Bolívar.

La concomitancia entre la intención de Asocipaz de fortalecer su propuesta a través del control de los gobiernos municipales y el anuncio de las AUC de intervenir el proceso electoral se prestó para lecturas muy polémicas entre los habitantes del sur de Bolívar. De hecho, algunos de los candidatos más cercanos a las propuestas paramilitares perdieron las elecciones⁸². Con todo, otras cuatro situaciones inmediatas contribuyeron a minar la hegemonía del movimiento contra-insurgente: la primera se relaciona con el

⁷⁵ Eran recursos de la comunidad internacional, la nación y el Plan Colombia. Ver periódico *El Universal*, 13 de junio de 2001, p. 5B.

⁷⁶ Ver periódico *El Universal*, 5 de noviembre de 2001, p. 2D.

⁷⁷ La versión social del Plan Colombia en el sur de Bolívar está a cargo de organizaciones como Fupad, AID, ARD y FIP.

⁷⁸ Desde 2002 la UE financia el Laboratorio de Paz en trece municipios del Magdalena Medio, con una inversión cercana a los 15 millones de euros. La Agencia Colombiana de Cooperación (ACCI) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm) están encargados de la ejecución del Laboratorio de Paz.

⁷⁹ Para un recuento teórico y analítico de la relación entre elites regionales, Gobierno Nacional, narcotraficantes y Fuerzas Armadas durante los procesos de paz, ver Mauricio Romero V., *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, IEPRI-Planeta, 2004.

⁸⁰ En esto Asocipaz imitó la táctica seguida por Acdegam, en el sentido de intentar el control de los gobiernos municipales. Ver Carlos Medina G., *Ob. Cit.*, pp. 235-236.

⁸¹ “AUC pedirán cuentas a candidatos electos”, en *Vanguardia Liberal*, 15 de mayo de 2000, pp. 1A y 3A.

⁸² Esto fue claramente lo que sucedió en municipios como San Pablo en 2001.

relativo fracaso de la ofensiva de las AUC contra los frentes guerrilleros existentes en el sur de Bolívar; la segunda tuvo que ver con la negativa del gobierno de Santa Rosa de someter a “consulta popular” la posibilidad de realizar la Convención Nacional en la zona rural del municipio, y el rechazo rotundo de Asocipaz y de “No al Despeje” a la invitación para asistir a la “pre-convención” que se realizaría en Ginebra (Suiza); la tercera, se derivó de la reiterada desaprobación a la conformación y al funcionamiento de la comisión de verificación nacional e internacional⁸³; la cuarta se vinculó a las reacciones que suscitaron los asesinatos de civiles a manos de las AUC.

Ciertamente, la gran ofensiva anunciada por Carlos Castaño contra los “campamentos de Gabino” en San Pablo, en julio de 2000, fue un fracaso. En la práctica, los frentes de ELN demostraron ser más fuertes en el terreno militar que sus enemigos. Además las dos guerrillas (ELN y FARC) se unieron en lo operativo para enfrentar a las AUC, de suerte que Castaño no cumplió su promesa de “recobrar para la nación” la totalidad del sur de Bolívar⁸⁴. Este fracaso desalentó las aspiraciones de algunos líderes políticos cercanos a Asocipaz y a “No al Despeje”, quienes empezaron a temer por sus vidas y optaron por asumir un perfil más discreto. De otra parte, ciertas comunidades rurales asentadas en la serranía de San Lucas tuvieron un respiro de alivio al comprobar la contención que sufrieron los paramilitares. Incluso, en la dimensión municipal, la guerrilla recobró ciertos espacios físicos y de influencia política, perdidos en los años inmediatamente anteriores.

Otro hecho que debilitó a Asocipaz fue la negativa del alcalde de Santa Rosa, Pastor García, de someter a consulta popular el posible despeje de parte del territorio del municipio para reali-

zar las negociaciones con el ELN. Esta decisión fue tomada luego de que el Concejo Municipal le otorgara al alcalde facultades para tal fin. A los ojos de muchos habitantes, esto contrariaba la posición defendida por Asocipaz frente al Gobierno Nacional, en el sentido de contar con la opinión popular en un asunto tan delicado, y además se aproximaba mucho a la oposición mantenida por las AUC ante las negociaciones entre el Estado y los grupos insurgentes. Esto de alguna manera se confirmó con la negativa de Asocipaz y de “No al Despeje” de vincularse como parte interesada en la reunión de Ginebra, en julio de 2000.

Reiteradamente, el movimiento contrainsurgente propuso la creación de una comisión de acompañamiento y verificación nacional e internacional en caso de que se creara la zona desmilitarizada en el sur de Bolívar⁸⁵. Sin embargo cuando el ELN aceptó la creación de la mencionada comisión y se definió su composición, los líderes de Asocipaz y “No al Despeje” alegaron dificultades operativas y logísticas para que ésta cumpliera sus funciones. Además, estos mismos líderes asumieron posiciones ambiguas con respecto a la aceptación o el rechazo de los recursos que el grupo de países amigos del proceso de paz deseaba invertir para el desarrollo social en el sur de Bolívar.

Por último, los continuos asesinatos de personas que intentaban sacar a riesgo propio pasta de coca del sur de Bolívar a través de Cerro Burgos⁸⁶ provocaron en diversos momentos reacciones colectivas contra las AUC en Santa Rosa. En adelante, sucederían hechos que evidenciarían el crecimiento de cierta animosidad entre ciertos sectores de la población y las AUC en Santa Rosa y en otros municipios del sur de Bolívar⁸⁷. La consecuencia más notoria de esta rela-

⁸³ El grupo de países amigos del proceso de paz (Suiza, Francia, España, Cuba y Noruega) conformarían esta comisión.

⁸⁴ Cosa distinta sucedió en Barrancabermeja donde los grupos guerrilleros fueron desalojados de las comunas nororientales y surorientales. Esta ofensiva fue iniciada por las AUC en 1997 y terminó en 2001, dejando cientos de muertos entre combatientes y civiles.

⁸⁵ Ver *supra* punto 9 del acuerdo de Aguasclaras.

⁸⁶ En Aguachica, el precio de kilo de base de coca es mayor en \$3.000 o \$4.000. En Santa Marta alcanza el doble del precio establecido por las AUC en el sur de Bolívar.

⁸⁷ Algunos de estos hechos son los siguientes: el cobro diferido que hicieron los paramilitares de los costos de las marchas a los habitantes de algunos municipios; el incendio de un hotel en Santa Rosa, donde residía el comandante de las AUC; el papel de sicarios que han asumido los integrantes de esta organización para “solucionar” conflictos entre particulares; el asesinato de un candidato a la alcaldía de San Pablo; las amenazas de las AUC y el intento de inculpar a la población civil de los reveses militares que han sufrido frente a la guerrilla, etc.

ción negativa fue el debilitamiento de las propuestas políticas que dieron vida a Asocipaz y el nacimiento de una corriente de opinión que tímidamente se arriesgaba a cuestionar la “hegemonía” de los paramilitares en la vida política y económica de estos municipios.

En síntesis, durante todo 2001 se extendió la situación de crisis política en el sur de Bolívar dado que el Gobierno Nacional y el ELN persistieron en su intención de celebrar la Convención Nacional en este territorio. Sin embargo, algunos hechos externos marcaron un giro en la situación política de la zona: paradójicamente, el inicio de la ejecución del Plan Colombia atrajo más presencia institucional (AID, ARD, Fupad, Programa Plante, Red de Solidaridad) y un ánimo de inversión social y económica desconocido para sus habitantes; la presencia más activa de organismos de las Naciones Unidas (OIM, PNUD, Acnur) y la Unión Europea pusieron cierto freno a las aspiraciones del movimiento contrainsurgente, dado que pusieron al descubierto la situación de violación del DIH e hicieron aún más vulnerable la propuesta política de Asocipaz. Otro hecho que opacó el protagonismo de esta organización fue la creación del Bloque Central Bolívar de las AUC, que cuenta con una amplia presencia en la zona y tiene una estructura política propia⁸⁸.

CONSIDERACIONES FINALES

En apariencia, Asocipaz intentó replicar la historia de Acdegam en Puerto Boyacá, en el sentido de ser una plataforma política y administrativa que permitiera alcanzar en el plano institucional legal los objetivos de una organización irregular. Sin lugar a dudas existen ciertas similitudes; por ejemplo, el hecho de que ambas organizaciones hayan nacido utilizando los mismos mecanismos que las organizaciones campesinas habían empleado para llamar la atención del Estado y tuvieran como objetivo central la creación de un bloque político “regional” que se opusiera a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los grupos guerrilleros⁸⁹.

Además, tanto Acdegam como Asocipaz tuvie-

ron buenas relaciones con destacados representantes de los gobiernos centrales de turno. En el primer caso, fue conocida la estrecha relación política que sostuvieron Pablo Guarín y el entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro; en el segundo caso fue clave el vínculo de algunos líderes de Asocipaz y funcionarios del ministerio del Interior. Sin duda estas relaciones influyeron en el reconocimiento oficial y en el acercamiento entre las mencionadas organizaciones y el Gobierno. De otra parte, las dos organizaciones actuaron contra los grupos guerrilleros “hegemónicos” en sus territorios –las FARC y el ELN, respectivamente–, y frente a ellos proclamaron una acción social y política integral para alcanzar el desarrollo de los municipios⁹⁰.

Sin embargo, en otros aspectos se diferenciaron. Asocipaz reunió tanto a políticos liberales como conservadores, mientras que Acdegam hizo parte de la corriente oficial del Partido Liberal y fue excluyente con otros sectores políticos. Al mismo tiempo, la predica ideológica de Acdegam contra las FARC estuvo enmarcada en los argumentos anti-comunistas, tan conocidos durante los años ochenta; por su parte, Asocipaz identificó al ELN con el pasado de pobreza y atraso que conoció el sur de Bolívar durante décadas y, en oposición, se colocó a sí misma en una perspectiva de “modernización” y de integración al resto del país.

Con todo, dos hechos fundamentales separan las experiencias de Acdegam y Asocipaz: la intensificación del conflicto interno y la presencia de instituciones internacionales. Ciertamente, desde 1998 la guerra asumió una dinámica desconocida antes en el país; fue justamente entonces cuando Carlos Castaño inició su ofensiva contra el ELN en el sur de Bolívar. Pero también fue ese año cuando el Gobierno Nacional inició el proceso de negociación con las guerrillas e invitó a la comunidad internacional a participar y hacer aportes en el desarrollo del mismo. Esta doble circunstancia impidió que Asocipaz repitiera la historia de Acdegam y marcó un proceso más acelerado de descomposición de su propuesta.

⁸⁸ Este Bloque cuenta con aproximadamente 5.500 efectivos, está dividido en 27 frentes de guerra y mantiene presencia en diez departamentos, entre los que se cuentan Bolívar, Antioquia, Santander y Arauca. Además, tiene una dirección militar a cargo de “Julián Bolívar” y un responsable político, Ernesto Báez; su comandante “máximo” es Javier Montañez.

⁸⁹ Cabe destacar que Acdegam se opuso a las negociaciones entre el Gobierno de Betancourt Cuartas y las FARC, iniciadas en 1984. Ver Carlos Medina G., *Ob. Cit.*, pp. 190-191.

⁹⁰ Carlos Medina G., *ídem.*, p. 234.

De otra parte, Asocipaz mostró la fragilidad de la frontera entre lo legal y lo ilegal dentro del ordenamiento institucional. Desde una postura aparentemente civil, esta organización desempeñó un papel clave en el rumbo del conflicto armado a nivel regional y, a través de presiones políticas y físicas, se opuso a una determinación del Gobierno Nacional. Aunque Asocipaz tuvo como espacio de nacimiento y acción a los gobiernos municipales y a las redes partidistas locales y regionales, lo fundamental fue que se movilizó para apoyar indirectamente la aspiración de las AUC de ser tratada de la misma forma que las FARC o el ELN dentro de un proceso de paz. Además, Asocipaz terminó proponiendo y recibió la solidaridad de algunas instituciones del Estado, para un “modelo de desarrollo” que recogía la visión de los sectores sociales enriquecidos con

el narcotráfico y que apoyaban al movimiento contrainsurgente⁹¹.

Finalmente, se puede caracterizar a Asocipaz como un fenómeno organizativo encabezado por las élites locales, que buscó con sus manifestaciones la inclusión y la aceptación política y económica de sectores sociales antes marginados dentro del *status quo* regional, en momentos en que se desarrollaba un proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Estas circunstancias explican la actitud de estos sectores con respecto a los grupos insurgentes y su dependencia frente a las aspiraciones políticas de las AUC. Esto, además, fue perceptible en la relación que mantuvo con el movimiento “No al Despeje”, nacido en el Magdalena Medio y de conducta más radical frente a la negociación con la guerrilla. Ciertamente, en muchos pasajes Asocipaz parecía subordinada a la dinámica impuesta por “No al Despeje”.

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/04/2004

FECHA DE APROBACIÓN: 16/05/2004

⁹¹ Es muy posible que estos sectores estuvieron deseosos de dirigir recursos acumulados en el narcotráfico hacia actividades lícitas, realizando de esta forma una suerte de reconversión productiva en proyectos agroindustriales.